

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310500320150062201, promovido por el señor **JOSÉ IVÁN ESCOBAR LACHARME**, en contra de la **AFP PORVENIR S.A Y COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada Porvenir S.A., en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el Quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los

procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **067**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor José Iván Escobar Lacharme, solicitó mediante el presente proceso, se declarara que se encuentra válidamente afiliado a Porvenir SA y que dicha AFP es responsable el pago de los aportes en pensión por el tiempo comprendido entre el 1 de julio del año 2005 hasta el 13 de marzo de 2008, y por tanto se ordene el pago y acreditación de dichos valores en la cuenta de ahorro individual, así como los rendimientos dejados de percibir.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que estuvo afiliado a Porvenir SA durante la relación laboral que lo unió con la compañía SUNISA S.A. desde el 16 de septiembre del año 2002, y a partir del mes de julio de 2005 y hasta el mes de marzo del año 2008, el empleador no pagó los aportes en pensión, siendo el último salario devengado la suma de \$3.947.000.

Explicó que mediante providencia 156-002864 del 10 de marzo de 2008, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad C.I. SUNISA en los términos de los artículos 1, 47 y siguientes de la ley 1116 de 2006. Porvenir SA se hizo parte en el proceso de liquidación judicial de la compañía, con la inclusión del crédito laboral por los aportes no cancelados del señor Escobar Lacharme, y mediante auto número 405-021088 de 2010 la Superintendencia de

Sociedades aprobó la diligencia de reconocimiento de créditos, asignación de derechos de voto y aprobación del inventario valorado, donde se aceptó a la A.F.P. como acreedor. Sin embargo, mediante radicado 2011-01-176017 del 27 de mayo de 2011, el apoderado de Porvenir S.A. exteriorizó su no aceptación de la adjudicación de los bienes inmuebles aprobada, salvo lo que le sea adjudicado en dinero, por lo cual, se realizó la readjudicación de los bienes excluyendo a Porvenir S.A., ello sin que hubiera sido notificado el demandante de la decisión de renuncia al cobro y sin que estén acreditados los periodos en la cuenta de ahorro individual.

Admitida la demanda mediante auto del dos (2) de junio del año dos mil quince (2015), una vez notificado Porvenir S.A., dio respuesta al libelo gestor indicando sobre los hechos narrados:

Aceptó que la empresa SUNISA S.A. dejó de pagar los aportes en pensión del demandante desde el mes de julio del año 2005 y hasta el mes de marzo del año 2008, por lo cual, se hicieron parte del proceso de liquidación de dicha entidad, pero no les consta la fecha de inicio y finalización del vínculo contractual. Narró que es cierto que se opuso su representada a la adjudicación de bienes en el proceso liquidatorio, por no tener la facultad legal ni contractual para admitir un medio de pago diferente al establecido en el Decreto 1406 de 1999 y 510 de 2003. La no aceptación de la adjudicación no constituyó una renuncia a obtener el pago de las acreencias que por concepto de aportes tiene en contra de la entidad en liquidación, pues las daciones en pago son un desgaste administrativo para la A.F.P. que pueden resultar más costoso que el mismo bien a recibir. No reconoció que se enuncie que el fondo se convierte en deudor solidario de los aportes, pues a la fecha no se recaudado el dinero correspondiente a los aportes. Finalmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas e interpuso las excepciones que

denomino: “ *Falta de Causa para pedir*”, “ *Inexistencia de las obligaciones demandadas*”, “ *Buena Fe*”, “ *Prescripción*”, “ *Ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada*”.

En audiencia del 27 de julio del año 2016, el Juzgado Tercero Laboral, decidió integrar el Litis consorte necesario por pasiva con Colpensiones, consecuente al traslado efectuado por el señor Escobar Lacharme. Una vez notificado del auto admisorio de la demanda, contestó:

Ser cierta la afiliación a Porvenir en las fechas expuestas, así como los periodos en mora enunciados. No constarle los demás hechos narrados en la demanda, pues corresponden a personas diferentes a su representada. Indicó que no puede hacer pronunciamiento respecto a las pretensiones de la demanda pues se encuentran direccionadas frente a terceros, e interpuso las excepciones de: “ *falta de causa para demandar*”, “ *imposibilidad de condena en costas*”, “ *prescripción*” .

En sentencia proferida el quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Tercero Laboral Del Circuito de Medellín, declaró que Porvenir S.A. es la encargada de reconocer, liquidar, y pagar a Colpensiones en favor del demandante, el valor de los aportes de la seguridad social en pensiones comprendidos entre el mes de julio de 2005 y el mes de marzo de 2008, junto con los intereses a los que haya lugar, los que deberá liquidar la entidad entiendo en cuenta los salarios de: 2005 (3.471.699), 2006 (3.713.000), 2007 (3.946.919) y 2008 (4.199.917) y ordenó a Colpensiones a recibir dichos pagos.

RECURSO DE APELACIÓN

La pasiva interpuso recurso de apelación, en contra de la sentencia emitida, exponiendo que no comparte los planteamientos dados por el juez de instancia, ya que con ello se resta responsabilidad al empleador moroso que en su momento realizó la deducción de las cotizaciones en pensión, causándose un enriquecimiento ilícito por su parte ya que es el único responsable del pago de los aportes es el empleador. Argumenta que la negativa en la recepción de los bienes inmuebles se encuentra debidamente justificada en la contestación de la demanda pues existe impedimento legal para ello conforme a los conceptos dados por la Superintendencia y el Ministerio. Respecto a los salarios enunciados en la sentencia, expone que se opone a ellos, pues no existe fundamento probatorio. Menciona que Porvenir S.A. si realizó acciones de cobro, sin embargo, éstas no tuvieron resultados. Insistió que no se hace relación a las deducciones que en un momento dado tiene que existir en dichos aportes como las del Fondo de Solidaridad, pues se está castigando a Porvenir, por lo que se remite a la contestación de la demanda e insiste en que la entidad si cumplió con su obligación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Corrido el traslado para alegar, el apelante expuso en término, que no hay certeza sobre los periodos laborados por el demandante y que, si bien se adjudicaron bienes a favor del fondo pensional, éstos no pueden ser abonados en la cuenta de ahorro individual del actor.

Explica que existe una imposibilidad legal de redimir los bienes en semanas, sin que pueda responder por aportes pensionales sobre los cuales en forma diligente

ejerció las gestiones de cobro. Argumenta, que es el empleador incumplido el responsable del pago de los aportes en pensión a favor del empleado, pero en la sentencia se excluyó al empleador de toda responsabilidad quien al haber realizado la captación de aportes es el único responsable del reintegro a favor del demandante. Explica que la falta de materialización de semanas respecto a lo recibido por dación en pago precisamente no implica que el fondo haya incumplido con su obligación, sino que precisamente ello deviene de las gestiones realizadas a favor del afiliado.

Solicita se revoque la sentencia de primera instancia.

Colpensiones en termino oportuno solicitó en sus alegatos recordar que su llamado al proceso es sólo con el fin de recibir los aportes correspondientes al demandante, y por ende, no puede ser condenada en costas, sino, por el contrario, recibir de parte de Porvenir S.A. los valores que corresponda, por lo cual, solicita se analice si se dan las condiciones para imputar las condenas que se realizan a cargo de Porvenir S.A. con el fin de definir los valores a recibir por la Administradora del Régimen de Prima Media.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar, si la A.F.P. Porvenir S.A. es responsable o no de la acreditación y pago de los aportes en mora del empleador CI SUNISA, entre el 1 de julio de 2005 y el 13 de marzo de 2008, y de ser así, sobre qué asignación salarial deben efectuarse, ello en atención a la renuncia a recibir los bienes inmuebles no aceptados en la adjudicación en el proceso liquidatorio de la entidad empleadora.

CONSIDERACIONES

Preliminarmente ha de indicarse, que el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001, restringe la competencia del superior en el recurso de alzada, a las materias objeto del recurso de alzada.

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

Aportado por la parte actora, en folio 133, reposa periodo certificado en donde se constata claramente que desde el periodo 2005/07 a 2008/03, respecto al señor José Iván Escobar, mora a cargo de C.I. SUNISA S.A., documento expedido por Porvenir S.A., allegado por la parte actora y que no fue tachado en la oportunidad procesal para ello, dicha información, se encuentra inmersa dentro de la presentación de crédito liquidación judicial de la sociedad anunciada, en donde claramente PORVENIR S.A. se hizo parte, indicando, qué valores correspondía a las liquidaciones de los trabajadores de la sociedad respecto a los pagos de aportes en pensión.

Mediante Auto 405-007955 del 20 de mayo de 2011, la Superintendencia de Sociedades, aprobó la adjudicación de bienes afín a la liquidación de la Comercializadora Internacional Sociedades Unidas S.A. en Liquidación Judicial, en donde a página 18, como créditos de PRIMERA CLASE se visualiza en numeral

40 Porvenir inmerso dentro de la prelación de créditos realizada dentro de la liquidación, (página 19), y en el mismo auto se aprueba la adjudicación de los bienes de la sociedad, decretando el levantamiento de las medidas cautelares y la cancelación de los gravámenes hipotecarios, también se lee en el numeral tercero:

“ADVERTIR a los acreedores beneficiarios que opten por no aceptar la adjudicación deberán informarlo al liquidador dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación de bienes según lo preceptuado en el artículo 59 de la ley 1116 de 2006.”

En auto del 25 de julio del año 2011 expedido por la Superintendencia de Sociedades, se indica que mediante radicado 2011-01-176017 de 27 de mayo de 2011 el apoderado de Porvenir S.A. manifestó la no aceptación de la adjudicación aprobada, salvo lo eventualmente adjudicado en dinero en efectivo, por lo cual, el liquidador solicito la readjudicación de bienes.

Finalmente, en auto del 28 de diciembre del año 2012, se terminó el proceso liquidatorio, auto aportado en página 44 a 51 del expediente, sin adjudicación de bienes a favor de Porvenir S.A., de acuerdo a lo que puede observarse en los elementos aportados como prueba. No se encuentra pues en pugna los extremos de la relación laboral como lo indica la parte accionada en sus alegatos, pues ello nunca fue objeto del debate probatorio, sino, el tiempo en que se omitió el pago efectivo de los aportes en pensión, tiempo que fue certificado por la misma entidad, refiriéndolos como aportes en mora.

De acuerdo al objeto del recurso de alzada, debe decirse que dentro de las obligaciones del empleador está el pago oportuno de los salarios y las cotizaciones

correspondientes en salud, pensión y riesgos profesionales de sus trabajadores, así como ofrecer un ambiente sano para el desempeño de sus funciones, incluso la ley 100 de 1993 establece:

“ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.”

Sin embargo, el legislador, en aras de proteger al trabajador como extremo pasivo de la relación laboral, también impuso en hombros de las administradoras de fondos pensionales la obligación de cobro cuando el empleador se constituya en mora en el pago de las responsabilidades a su cargo así:

Artículo 24 de la ley 100 de 1993 así:

«Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.»

Por su parte el decreto 2633 de 1994 en su artículo primero contempló:

«El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o adicionen y las disposiciones del presente Decreto.»

«Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.»

Si bien en principio recae por mandato legal la obligación del empleador en el pago de los aportes, también hay sobre las A.F.P., el compromiso del cobro de los aportes respecto a los empleadores morosos, siendo su responsabilidad recaudar dicha cartera, pues a diferencia del afiliado, tienen los mecanismos idóneos para constatar el momento de deuda y proceder a su recaudo. En sentencia SL 1363 de 2018 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó:

“...Para responder al requerimiento de la censura, ésta Sala de Casación ratifica, que desde la sentencia CSJ SL 22, jul, 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia respecto a los efectos de la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es por ello que, a partir de la referida providencia, la Corte estableció que cuando se presente dicha situación, y esto necesariamente impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios.

También hizo expresa precisión la Corte, para el caso concreto de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que, si estos han cumplido cabalmente con el deber que les asiste frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que, antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester

verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro...”.

El año siguiente y sobre el mismo tema se afianzó dicha postura en CSJ SL3112-2019:

“De entrada, advierte la Sala que el razonamiento del Colegiado de instancia no es equivocado y, por el contrario, está acorde con lo que esta Corporación, de manera reiterada y pacífica, ha establecido en su jurisprudencia en cuanto a que, para contabilizar las semanas reportadas en mora de un empleador, cuando la entidad de seguridad social no hizo acciones de cobro, es necesario acreditar que en ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios en ese período (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092-2016, CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018 y CSJ SL1624-2018). Precisamente en la providencia CSJ SL3707-2017, la Sala señaló:

Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del censor referentes a la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes a la seguridad social, cumple recordar que la Corte en sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia y estableció que cuando se presente dicha situación, y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.”

Debe tenerse en cuenta que la obligación de asumir el derecho pensional por parte de la A.F.P., que no inició el trámite correspondiente para obtener el pago de los periodos en mora, mantiene incólume la facultad que la norma le otorgó para hacer

efectivo, por la vía ejecutiva, del pago de dichas cotizaciones. Empero se evidencia que, en este caso, la Administradora de Fondo de Pensiones si se hizo parte del proceso liquidatorio de la empresa empleadora, rechazando en dicho trámite, los bienes que serían adjudicados como pago de sus acreencias, bajo el argumento que, sólo recibía liquidez.

Plantea la accionada, ahora, que si efectuó cumplidamente las acciones pertinentes para obtener el pago de los aportes en mora, pero que el procedimiento efectuado fue infructuoso. Se encuentra la Sala en desacuerdo con dicha manifestación, pues si se observa el detalle de aportes en mora del afiliado, página 133, la mora del empleador inició en el periodo 2005-07 de manera continua hasta el 2008-03, haciéndose parte del proceso liquidatorio Porvenir S.A. para el 2008/04/18 de acuerdo a radicado 3006-01-060538 página 114, es decir, **tres años después** del inicio de la mora, lo cual, indica una demora injustificada por parte de la A.F.P. que indudablemente tuvo como consecuencia la insolvencia del empleador y la imposibilidad de cobro de los aportes.

Sumado a ello, se opuso a la adjudicación de bienes bajo los argumentos de un concepto emanado por la Superintendencia Financiera, dejando de lado los derechos que debía salvaguardar de quienes se encontraban válidamente afiliados, fallando en sus deberes como administradora del Fondo Pensional.

En sentencia SL 2074 de 2020 se precisó respecto a esta responsabilidad.:

“Ese entendimiento, que respalda el razonamiento del Tribunal, pondera y distribuye adecuadamente las cargas entre los diferentes actores del sistema de seguridad social porque, *«ante el acaecimiento del riesgo asegurado el*

trabajador no puede quedar desprotegido ante el descuido de su empleador en el pago de las cotizaciones y la falta de cobro de la administradora de pensiones”

El tema incluso, fue recientemente discutido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en providencia SL 3405 de 2022 se enfatizó la responsabilidad del fondo pensional, y cómo su desidia afecta gravemente los intereses del afiliado, quien no puede quedar desprotegido bajo ningún punto de vista por su inactividad, menguando su derecho pensional ante la omisión de terceros.

Se aclaró así:

“Para la Sala no es de recibo la perplejidad de la censura en punto a las acciones de cobro que ofrece el ordenamiento jurídico, o su eficacia. Como se explicó en sentencia CSJ SL3691-2021, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que a las entidades administradoras de los regímenes pensionales, incumbe promover las acciones de cobro por incumplimiento de las obligaciones del empleador y, según el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, ello deberá realizarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes «a la fecha en la cual se entró en mora».

Desde luego, el hecho de que tales gestiones resulten «eficaces y expeditas», no es una variable que pueda trasladarse al afiliado, quien cumplió con la entrega de su fuerza de trabajo como supuesto para causar el aporte, tal cual le correspondía. En la providencia memorada en el párrafo anterior, la Corte recordó que la administradora, como agente profesional en la prestación del servicio de la seguridad social, debe impulsar las acciones de cobro a los empleadores morosos, al momento de ocurrir el incumplimiento y en el plazo determinado en la ley.

Así las cosas, a la luz de las premisas fácticas indiscutidas, el razonamiento del Tribunal se exhibe acertado y acorde con el criterio adoptado por esta Corporación, al menos desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, en la que se dijo que cuando se presenta mora en el pago de los aportes, «si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios»

Siendo clara y pacífica la posición del máximo órgano de cierre respecto a la responsabilidad que recae sobre la AFP ante su omisión **efectiva** de cobro, le asiste razón al *a quo* al ordenar a Porvenir SA la liquidación y pago de los periodos a favor del demandante, y su remisión a Colpensiones, fondo al que finalmente se encontraba afiliado, cotizaciones que deben contener los intereses respectivos para suplir los rendimientos que se hubieren causado de haber sido pagados a tiempo, utilizando para ello, las herramientas que tiene en su haber para ello.

Dentro de los deberes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, se encuentra la gestión eficiente de los dineros de los fondos de pensiones obligatorios, por tanto se impone su obligación de proteger no solo el ahorro pensional de sus afiliados, sino además de ser diligente en el recaudo respectivo, y tomar todas las medidas y acciones tendiente a este y su recuperación, lo cual le imponía incluso recibir activos que eviten la pérdida de los aportes respectivos, y al negarse a ello, lo decidido lo asume bajo propio riesgo, y por tanto las consecuencias deben ser asumidas por la A.F.P. con cargo a su propio patrimonio.

Habiendo sido objeto de recurso también los salarios ordenados para efectuar la liquidación por Porvenir, debe indicarse que al momento que se hizo parte la AFP

del proceso liquidatorio de la ex empleadora del demandante indicó los salarios reportados del trabajador y sobre los cuales liquidaba los aportes:

IDENTIFICACION			NOMBRE DEL AFILIADO					CUENTA	
CC 71576370			Jose Ivan Escobar					1118600	
PERIODO	SALARIO BASE LIQUIDACION	% COTIZACION OBLIGATORIA Y FSP	DIAS COTIZADOS	CAPITAL ADEUDADO		DIAS MORA	% INTERES DE MORA	INTERESES ADEUDADOS	SUMATORIA INTERES Y CAPITAL
				OBLIGATORIOS	F.S.P.				
2008 03	4,199,917	16.00	30	671,986	41,999	9	.70	4,704	676,690
2008 02	4,199,917	16.00	30	671,986	41,999	38	2.98	20,025	692,011
2008 01	4,199,917	16.00	30	671,986	41,999	67	5.30	35,615	707,601
2007 12	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	99	7.93	48,514	660,286
2007 11	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	129	10.25	62,707	674,479
2007 10	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	158	12.52	76,594	688,366
2007 09	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	192	15.24	93,234	705,006
2007 08	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	220	17.21	105,286	717,058
2007 07	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	253	19.55	119,601	731,373
2007 06	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	282	21.64	132,387	744,159
2007 05	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	312	23.55	144,072	755,844
2007 04	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	339	25.25	154,472	766,244
2007 03	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	367	27.04	165,423	777,195
2007 02	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	401	28.94	177,047	788,819
2007 01	3,946,919	15.50	30	611,772	39,469	429	30.41	186,040	797,812
2006 12	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	458	31.96	183,935	759,450
2006 11	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	488	33.63	193,546	769,061
2006 09	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	551	37.25	214,379	789,894
2006 08	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	581	38.95	224,163	799,678
2006 07	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	611	40.64	233,889	809,404
2006 06	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	641	42.34	243,673	819,188
2006 05	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	674	44.20	254,378	829,893
2006 04	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	704	45.90	264,161	839,676
2006 03	3,713,000	15.50	30	575,515	37,130	733	47.54	273,600	849,115
2006 02	3,712,929	15.50	30	575,504	37,129	766	49.40	284,299	859,803
2006 01	3,712,929	15.50	30	575,504	37,129	794	50.99	293,449	868,953
2005 12	3,471,649	15.00	30	520,747	34,716	823	52.62	274,017	794,764
2005 11	3,471,649	15.00	30	520,747	34,716	855	54.43	283,443	804,190
2005 10	3,471,649	15.00	30	520,747	34,716	885	56.13	292,295	813,042
2005 09	3,471,649	15.00	30	520,747	34,716	915	57.82	301,096	821,843
2005 08	3,471,649	15.00	30	520,747	34,716	947	59.63	310,521	831,268
2005 07	3,471,649	15.00	30	520,747	34,716	978	61.38	319,635	840,382
SUB TOTAL (OBLIGATORIOS, FSP, INTERESES)				18,812,347	1,216,349			6,359,084	26,387,780

No es de recibo que se oponga entonces a las sumas que, la A.F.P. determinó como base salarial y que siguió el juez de primera instancia para su sentencia, pues en el proceso no hay otros elementos probatorios que den cuenta sobre el I.B.C. del actor, y la documental a la que se hace referencia no fue tachada ni desconocida por la pasiva en su oportunidad procesal, siendo su conocimiento necesario para la liquidación del cálculo correspondiente, tal y como lo enunció la apoderada de Colpensiones en sus alegaciones.

Considera desacertada la Sala los argumentos dados por Povenir S.A. en su recurso de alzada y en los alegatos presentados, en atención a que, en estos últimos, refiere

la adjudicación de bienes, situación que claramente no se encuentra probada en el proceso.

Es por ello, que es acertada la decisión tomada por la Juez de primera instancia y deberá confirmarse, cayéndose por su peso, el argumento de la apelación interpuesta.

Costas a cargo, de la parte apelante vencida en su recurso en la suma de \$1.160.000

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Costas a cargo, de la parte apelante vencida en su recurso en la suma de \$1.160.000

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b30395dc41b934f2f6809b7f2cb545307e70a4088fce0b85d280300c5e8cccce**

Documento generado en 16/03/2023 02:06:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>